11 2026

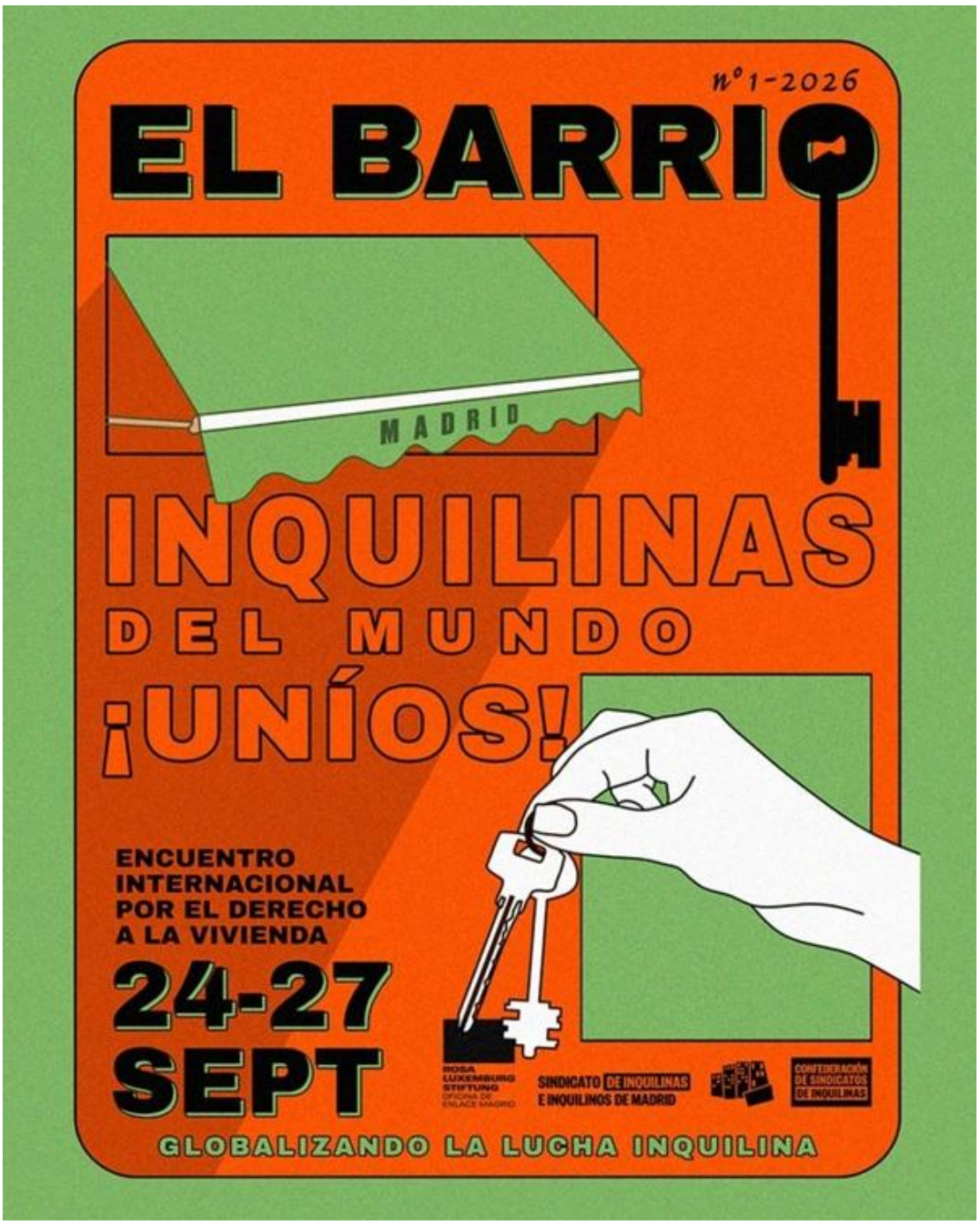
De las acampadas a la huelga general

Kike España, Gerald Raunig

El 7 de octubre de 2026 falleció de agotamiento Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años y activista del Sindicato de Inquilinas. Dos semanas antes, tras 70 años, fue desalojada de su vivienda de forma violenta y despiadada, aunque pudo volver a ella una semana después, tras las protestas masivas que se produjeron en todo el país. Esas dos semanas fueron, al mismo tiempo, un periodo marcado por las movilizaciones más importantes en el Estado español desde las ocupaciones de las plazas de 2011.

Hace casi diez años se crearon en España los primeros sindicatos de inquilinas, que ampliaron el concepto de sindicato más allá de su uso limitado a los sectores del mundo laboral para abarcar también los ámbitos de la vivienda y de la vida. Esta nueva forma de sindicato se basa en las experiencias de los movimientos de ocupación de plazas de 2011 y sus prolongaciones posteriores. También bebe de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la red de acción y asesoramiento que ha acompañado en todo el Estado español a personas afectadas por hipotecas y desahucios. A partir de 2017 esta nueva forma de sindicato de inquilinas se puso en marcha, primero en Barcelona, luego en Madrid, después en Málaga y en muchas otras ciudades. Sus objetivos más inmediatos eran la acción sindical y directa contra los

abusos de poder de las empresas inmobiliarias, las campañas contra la especulación y los desahucios, la creación de organización de base bloque a bloque, calle a calle y barrio a barrio, la influencia en la legislación de arrendamientos y en las políticas públicas de vivienda y, en general, la construcción y el desarrollo de un movimiento contra la mercantilización total del espacio habitable y de la vida. Si en sus primeros años los sindicatos se centraron sobre todo en la organización local, en octubre de 2025 se celebró en La Casa Invisible de Málaga el primer congreso de ámbito estatal, en el que se fundó la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.



En la última semana de septiembre de 2026, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, se reunió en el recinto ferial de IFEMA con fondos de inversión como Blackstone, Brookfield y Azora para debatir nuevas oportunidades de negocio. Al mismo tiempo, 70 sindicatos de inquilinas y movimientos por la vivienda de Europa, América y Australia se reunían en una cumbre alternativa, en la que exigieron la regulación

de los alquileres, contratos de larga duración y más derechos para quienes habitan las ciudades. Precisamente en esos días, el 23 de septiembre, el fondo inmobiliario Urbagestión ejecutó un desahucio en el barrio madrileño de Retiro: hizo sacar por la fuerza a Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, del piso en el que había vivido durante 70 años. Podría haber sido un caso como tantos otros, ya que en el Estado español se producen de media 67 desahucios al día. Pero no fue así. El caso de Maricarmen fue la culminación de una década de organización y lucha de los movimientos por la vivienda en todo el Estado y, en particular, de los sindicatos de inquilinas.

«¡Ni una Maricarmen más!» El Sindicato de Inquilinas de Madrid, junto con las participantes internacionales en la contracumbre y, sobre todo, junto con la propia Maricarmen, como activista del sindicato, consiguió que su desahucio fuera la gota que colmó el vaso de la crisis de la vivienda en el Estado español. Esta crisis es la de un modelo que es, sin duda, una manifestación global del capitalismo algorítmico, inmobiliario y financiero. Sus raíces propiamente españolas se encuentran en el franquismo y en una legislación neoliberal que no ha dejado de agravar la situación.

Las manifestaciones en las grandes ciudades superaron todas las expectativas, y en la Puerta del Sol de Madrid se montó una «acampada», una ocupación de la plaza con tiendas de campaña. Fue en el mismo lugar y con la misma estética política que en mayo de 2011, cuando, con el 15M, se ocupó la Puerta del Sol después de las ocupaciones de plazas en Túnez y El Cairo y unos meses antes de los primeros movimientos «Occupy» en Estados Unidos. Aunque quienes ocupan hoy las plazas son, en gran parte, una nueva generación, hay muchos ecos afectivos de aquel tiempo de cambios de hace quince años. Pronto surgieron otras «acampadas» en Málaga, Sevilla, Cádiz, Santiago y Barcelona, y el eslogan racista

y de extrema derecha contra los refugiados en Ceuta, «El problema son los invasores», se transformó en «Los invasores son los inversores». De este modo, la narrativa nacionalista de la defensa de España frente a los migrantes se vio desbordada y dio paso a una campaña anticapitalista por el derecho a la vivienda. Los logros del movimiento se produjeron en muchos niveles, y en concreto en el hecho de que, por primera vez en el Estado español, una persona desahuciada porque no se le había renovado el contrato de alquiler podría haber vuelto a su vivienda al mismo precio, e incluso en mejores condiciones que antes. Sin embargo, no pudo hacerlo porque Maricarmen Abascal falleció el 7 de octubre en el hospital antes de poder volver a su casa. En el ámbito político, la consecuencia fue que el Gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación se vieron obligados a hablar públicamente de contratos de alquiler indefinidos, del fin de los desahucios y de la bajada de los alquileres y, sobre todo, a cuestionar el modelo que convierte la vivienda en un negocio.



Sin embargo, las consecuencias realmente profundas van mucho más allá de estos logros concretos. Las acampadas son todo menos una ocupación simbólica del espacio público cuyo único objetivo sea imponer unas cuantas reivindicaciones. Son campos de experimentación política de primer orden, que transforman los procesos de subjetivación y de expresión política colectiva de toda una generación. Son, en sí mismas, el experimento de una nueva forma de convivencia que, aunque solo sea temporalmente, suspende el dominio capitalista sobre nuestros espacios y nuestras vidas. Y lo hacen en los tránsitos, los cruces y las fricciones entre quienes, por diversas razones, están acostumbrados a vivir en la calle, quienes trasladan durante un tiempo sus formas de organización y de convivencia a las tiendas de campaña y a las plazas, y quienes dedican todo el tiempo posible a las asambleas y a los grupos de trabajo. Las acampadas y las plazas ocupadas demuestran que, en medio de las ciudades lisas del capitalismo

maquínico, es posible otra vida, y que hay fuerza y capacidad para organizarse contra los desahucios, la gentrificación y las formas más extremas de intensificación capitalista.

Tras el fracaso de las propuestas legislativas del Gobierno para reformar la situación del alquiler, el 29 de noviembre se celebrarán nuevas elecciones en España. Las elecciones anticipadas han forzado a los partidos de centroizquierda y de la izquierda fragmentada, empujadas por los sindicatos y los movimientos sociales a proponer políticas más transformadoras. Hasta el punto de que el Frente Amplio —la mayor coalición electoral de ámbito estatal a la izquierda de la socialdemocracia— ha designado a Ada Colau, exactivista de la PAH y exalcaldesa de Barcelona, como cabeza de lista, anunciando que darán prioridad a las problemáticas de la vivienda.

Pero antes, partiendo de las experiencias de la organización y de las acampadas, el sindicato también vuelve al terreno que, en teoría, le es propio. Ya hace un año, los Sindicatos de Inquilinas propusieron en su congreso de Málaga la huelga general como forma de acción central. Lo que en aquel momento era aún un horizonte vago, la huelga general se ha convertido ahora, para muchos antes de lo previsto, en algo totalmente concreto. Se organizará en todo el Estado español el 11 de noviembre. En los preparativos se están celebrando innumerables asambleas en comisiones de trabajo y comités de barrio, y por todas partes se están formando comités de huelga. Sin embargo, en los preparativos para la huelga general también se está contando con la participación de los sindicatos tradicionales, no solo como instrumento para lograr una participación masiva, sino también para reforzar la conciencia de que la cuestión de la vivienda es una preocupación sindical. Con ello se pretende también cambiar la percepción de las organizaciones políticas tradicionales, de modo que entiendan la

vivienda y la vida en las ciudades como una cuestión transversal que trasciende todas las fronteras sectoriales y que, además, afecta a todos los sectores. En este sentido, y siguiendo la tradición de los sindicatos radicales españoles —como, por ejemplo, la CNT en la Cataluña de la década de 1930—, se está desarrollando, de cara al 11 de noviembre, un proceso de cooperación capaz de trastocar de forma duradera los rígidos esquemas tradicionales entre espontaneidad y burocracia. Una huelga general, por tanto, que parte de los movimientos sociales y de la organización micropolítica en los barrios y que, sin embargo, integra plenamente a los sindicatos tradicionales y a las organizaciones políticas. Y todo ello con el objetivo, sobre todo, de avanzar hacia una organización transnacional a escala europea. [1]

11 NOVIEMBRE

HUELGA GENERAL

POR LA VIVIENDA



CONFEDERACIÓN
DE SINDICATOS
DE INQUILINAS

[1] https://www.eldiario.es/economia/sindicatos-organizaciones-sociales-siete-paises-reclaman-fuerte-movilizacion-coordinada-europa_1_13635630.amp.html